

# Franquismus und Salazarismus: Legitimation durch Diktatur?

Herausgegeben von  
Federigo Fernández-Crehuet López

– Sonderdruck –



Vittorio Klostermann  
Frankfurt am Main  
2008

## Universidad y enseñanza del derecho

### 1 Refundar la universidad: la ley de ordenación de 1943

La universidad no pudo sustraerse al proceso de implantación de la dictadura que comenzó con la guerra civil española (1936-1939). Uno de sus aspectos más doloroso lo encontramos seguramente en el exilio y en la depuración, con la que aquí nos ilustra Carolina Rodríguez. Precisamente el exilio y la depuración dejaron una universidad más maleable para el poder político, en su objetivo de constituir la denominada universidad nueva.<sup>1</sup> Este concepto implicaba una ruptura frente al pasado más reciente, el liberal y republicano, y una búsqueda de un nuevo fundamento que se decía encontrar en las esencias patrias, en la España imperial. El instrumento elegido para su concreción era una nueva ley que sustituyese el vetusto orden de la todavía vigente ley Moyano (1857).

Su elaboración no fue sin embargo una empresa sencilla, más bien se trató de un camino largo y erizado de problemas: los equilibrios entre las distintas fuerzas en pugna del régimen y entre las potencias en guerra se reflejaron en su texto. En abril de 1939 apareció un “Proyecto de ley sobre reforma universitaria” que fue publicado para su estudio.<sup>2</sup> Y en espera de lo que dispusiera la nueva legislación, fue suprimido todo gobierno colegiado en la universidad lo que aumentaba la autoridad del rector y de los decanos.<sup>3</sup>

Hasta que la nueva legislación de enseñanza superior especifique las atribuciones y deberes de las autoridades y organismos corporativos integrantes de las universidades y sin perjuicio de solicitar el asesoramiento particular o colectivo de los

1 Por una orden de 20 septiembre 1938 se creó en la zona nacional una comisión de reforma de la enseñanza universitaria. Un buen estudio de esta reforma: CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ, *La Universidad de Madrid en el primer franquismo. Ruptura y continuidad (1939-1951)*, Madrid, 2002, pp. 55-222. Para el paralelismo entre esta refundación de la universidad y la universidad fascista véase FRANCISCO MORENTE VALERO, “La universidad fascista y la universidad franquista en perspectiva comparada”, *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*, 8 (2005), pp. 179-214.

2 Orden de 25 abril 1939.

3 Decreto de 1 diciembre 1939.

claustrales funcionarán éstas en su conjunto bajo la alta dirección de los Rectores y, en sus distintas Facultades bajo la de sus Decanos.

La medida es significativa pues adelanta uno de los ejes que ordenó el gobierno de la institución. Meses después, un nuevo ministro de Educación nacional –José Ibáñez Martín (1939–1951)– retomó el asunto: pidió a las universidades su opinión sobre una serie de aspectos para reformar “a fondo” la universidad<sup>4</sup> y presidió las reuniones del Consejo nacional de educación dedicadas al estudio de la reforma, se aprecia de esta manera la importancia que tenía la elaboración del texto y la confianza que se había depositado en él. Hubo que esperar, sin embargo, hasta 1943 para que este proceso concluyese: se sucedieron dos anteproyectos, uno fechado en 1941<sup>5</sup> y otro en 1942,<sup>6</sup> el proyecto<sup>7</sup> y finalmente la “Ley sobre ordenación de la universidad española” de 29 de julio de 1943 (LOUE).

En una extensa exposición, la ley hacía una reinterpretación de nuestra historia universitaria que servía para situar desde el punto de vista ideológico la reforma. De “la gran Universidad Imperial” a “la corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y masónica de la Institución Libre” emerge toda una toma de postura que intenta legitimar el orden nuevo.

La ley establecía (artículo 18) las normas para organizar las enseñanzas (ingreso en la facultad, periodo lectivo, sistema de cuatrimestres, dispensa de escolaridad, calendario, inspección ...) y los exámenes (artículo 19), para obtener los grados de licenciado (artículo 20) y doctor (artículo 21), y para convalidar títulos. Se terminaba con el monopolio que la Universidad de Madrid –denominada Central hasta esta ley– tenía en la colación del grado de doctor: ahora todas eran universidades de distrito y todas podían conferir los grados.<sup>8</sup>

4 Orden de 9 marzo 1940. 1. Régimen de gobierno de la universidad.– 2. Modificaciones de los planes de estudios actuales.– 3. Patrimonio y presupuesto universitario.– 4. Ingreso del alumnado en la universidad y en las distintas facultades.– 5. Sistema de selección del profesorado. Profesorado especial (ayudantes y auxiliares).– 6. Número de universidades y distribución de facultades.– 7. Sistema de pruebas, indicando la conveniencia de separar la función docente de la examinadora.– 8. Periodo escolar (curso anual o de dos semestres).– 9. Limitación de matrícula.– 10. Residencias de estudiantes.

5 Anteproyecto de ley para la organización de las universidades nacionales, 1941.

6 Anteproyecto de ley para la organización de las universidades españolas, 1942.

7 Proyecto de ley sobre la ordenación de la universidad española, *Boletín oficial de las Cortes españolas* (29 mayo 1943).

8 ANTONIO MERCHÁN, “Centro y periferia: el doctorado en derecho durante el siglo XX”, en *La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*, edición de Adela Mora, Madrid 2004, pp. 401–441. Una lectura

Nos encontramos desde luego ante una universidad elitista: la LOUE permitía fijar un número máximo de alumnos para el primer curso de cada licenciatura, no preveía la creación de nuevas universidades –hasta finales de los años sesenta no se incrementó su número–, prohibió la enseñanza libre ... Esta prohibición establecía de hecho un monopolio estatal en la enseñanza universitaria, lo que provocó la crítica de la Iglesia.<sup>9</sup>

Las facultades universitarias aparecían en la ley (artículo 14) como los “órganos específicos de la función docente de las Universidades”, que “preparan y habilitan a los escolares [...] para la colación e investidura de los grados académicos de Licenciado y Doctor”. Las facultades se estructuraban en cátedras, compuestas por su titular y por los profesores adjuntos y ayudantes de clases prácticas necesarios para la atención de sus funciones.

Para su desarrollo, la ley remitía a los distintos decretos que se dictarían para ordenar cada facultad. Un inciso, breve, para reflexionar sobre el término utilizado, “ordenación” (ley sobre ordenación, los decretos sobre ordenación) –no reforma, término que comenzará a utilizarse en los años sesenta– que me parece de interés.

Sin embargo, la formación de los universitarios no estaba confiada exclusivamente a las facultades: la educación religiosa, política y cultural eran funciones de los colegios mayores.<sup>10</sup> La universidad nueva perseguía la formación integral (global, total, completa) del alumno –ahí radicaba su alcance más hondo, decía el ministro– y para ese fin los colegios mayores eran una pieza clave, fundamental de la reforma. Por ello los admitidos en una facultad debían residir o adscribirse a uno. Entre los distintos establecimientos que se fueron creando destaca el Ximénez de Cisneros, heredero de la Residencia de estudiantes y para el que se construyó una nueva sede en la ciudad universitaria de Madrid. Si leemos sus memorias comprenderemos

salmantina en MANUEL MARTÍNEZ NEIRA, “La facultad de derecho de Salamanca en la posguerra”, en *El derecho y los juristas en Salamanca (siglos XVI–XX). En memoria de Francisco Tomás y Valiente*, coordinado por Salustiano de Dios, Javier Infante, Eugenia Torijano, Salamanca 2004, pp. 170 ss.

9 MARÍA ÁNGELES SOTÉS ELIZALDE, *Universidad franquista: debate sobre la libertad de enseñanza (1939–1962)*, Pamplona 2004, pp. 276 ss. Más tarde, por ley de 16 julio 1949 se estableció que la enseñanza se clasificaba en oficial y libre.

10 Éstos se organizaban según el decreto de 21 septiembre 1942. En su preámbulo podemos leer: “La concepción de la Universidad, no sólo como centro de formación intelectual, de preparación profesional o de investigación científica, sino como cantera de educación íntegra de la juventud llamada a ocupar los puestos de más alta responsabilidad y trascendencia en la vida nacional, obliga a crear Organismos adecuados que lleven a cabo tan esencial tarea”.

mucho de lo que significó el esfuerzo de reforma universitaria.<sup>11</sup> Que heredase el patrimonio de la Residencia no fue algo fortuito, aunque la ley hablaba de restaurar los colegios de la universidad de antiguo régimen pesaba más –opino– el ejemplo próximo de aquella, aunque ahora se imitase con otra orientación.

Para asegurar esa formación integral, la LOUE estableció unas enseñanzas complementarias (formación religiosa, política y educación física). No se consideró necesario, sin embargo, establecer un control específico sobre los libros de texto.<sup>12</sup>

Por decreto de 26 de enero de 1944 se estableció en las universidades españolas la enseñanza religiosa conforme a la doctrina católica y las orientaciones y disciplina de la jerarquía. Se trataba de una materia obligatoria para todos los universitarios, equiparable a las otras que componían los planes de estudios, que se desarrollaba –con lecciones de una hora semanal– en el primer cuatrimestre de los cuatro primeros cursos de cada facultad.<sup>13</sup> Los profesores eran sacerdotes declarados aptos por la jerarquía eclesiástica y propuestos por el obispo, nombrados por el Ministerio y con la consideración académica de catedráticos. Para organizar esta enseñanza (lecciones, biblioteca, seminarios) existía un director de formación religiosa universitaria que además supervisaba las distintas celebraciones religiosas y asesoraba en esta materia al Sindicato español universitario (SEU).

11 Ilustra la *Guía de la Universidad de Madrid* (Madrid 1945, pp. 491 ss.), la primera publicada tras la guerra. Además de reseñar las actividades religiosas y culturales en las que participaron los doscientos cincuenta colegiales que había en el curso 1944–1945, se reflexionaba sobre otras funciones del mayor: formar “hombres con hábito de mando, futuro estado mayor de la clase estudiantil, a la que irán imponiendo su ritmo, decoroso y grave [...] sabrá mandar también cuando, ya enteramente formado, le encomiende el Estado cualquier tarea importante [...] y ése es también el gran valor educativo que el nuevo sistema trae: dar vida a una espléndida ‘élite’, capaz, luego, de dirigir el país” (pp. 506–507). Para las mujeres se constituyó el colegio mayor de Santa Teresa de Jesús con ciento noventa “señoritas” (pp. 509 ss.).

12 La dirección general de enseñanza universitaria en escrito fechado el 13 de enero de 1944 pidió al Consejo nacional de educación un dictamen acerca de la pertinencia de que el Ministerio fiscalizase los libros de texto en la universidad. El ponente de la sección primera argumentó que en la universidad no había libros de texto propiamente dichos, sino bibliografía, y teniendo en cuenta la existencia de una censura gubernativa para toda clase de impresos no parecía aflorar un problema específico. Por lo tanto bastaba con que los decanos informasen sobre las obras utilizadas. Archivo central de educación (ACE) 93967.

13 Primero, apologética y eclesiología; segundo, dogmática; tercero, moral general y derecho público eclesiástico; cuarto, deontología profesional y algunos temas monográficos.

Por decreto de 29 de marzo de 1944 se establecieron en las universidades cursos para la formación política de los escolares. Era una materia obligatoria, equiparable a las otras y se desarrollaba –mediante lecciones de una hora a la semana durante el primer cuatrimestre– en los tres primeros cursos de cada facultad.<sup>14</sup> Esas lecciones se completaban con alguna conferencia dada por personas de especial significación cultural y política. Los profesores eran propuestos por el jefe de cada distrito universitario del Servicio español del profesorado de enseñanza superior de Falange española tradicionalista y de las Juntas ofensivas nacional-sindicalistas, con el visto bueno del rector, y el Ministerio de educación nacional hacía el nombramiento.

En fin, por otro decreto de 29 de marzo de 1944 se estableció la educación física. Los ejercicios prácticos se desarrollaban separadamente para mujeres (gimnasia educativa, rítmica, bailes populares y un deporte a escoger entre baloncesto, balonmano, hockey o tenis) y hombres (gimnasia de aplicación, atletismo, natación y un deporte a escoger entre baloncesto, fútbol, hockey, rugby, tenis, pelota vasca, remo, esgrima, esquí y montaña). La organización de esta enseñanza corría a cargo de la Junta nacional de educación física compuesta –bajo la presidencia del director general de enseñanza universitaria– por un catedrático de fisiología designado por el Ministerio, un representante de la delegación nacional de deportes y un representante del SEU. Paralelamente, en cada universidad se creaba una junta de educación física presidida por el rector y con representantes del profesorado, de la dirección de formación religiosa universitaria, de la delegación nacional de deportes y del SEU. El profesorado para la educación física universitaria era nombrado por el Ministerio de educación nacional a propuesta del SEU y previo informe del respectivo rector.

## 2 Ordenar la facultad de derecho: el plan de 1944

Tras la guerra se reorganizó la enseñanza del derecho según el plan de estudios provisional dado para el curso 1931–1932, vigente hasta el estallido bélico. En 1942 el Consejo nacional de educación aprobó un proyecto de reglamento de

14 Primero, la esencia de lo español, su olvido y su recuperación (i. la esencia de lo español, ii. lo antiespañol en la historia, iii. el Movimiento nacional como esfuerzo para la recuperación de lo español); segundo, la realidad económica, social y política de España (i. la realidad económica de España, ii. la realidad social de España, iii. la realidad política de España, iv. la política exterior de España); tercero, la empresa del Movimiento nacional (i. la nueva organización económica, ii. la nueva organización social, iii. organización político-administrativa del nuevo Estado, iv. misión de España en el mundo).

régimen interno de la facultad.<sup>15</sup> Ésta se configuraba en dos secciones, derecho y ciencias políticas. Para derecho se pensaba en un plan con unas asignaturas fundamentales (obligatorias para todos los alumnos) y otras especiales (agrupadas en grupos de especialidad), y se restauraba el grado de bachiller que habilitaría para el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales, secretarios e interventores de ayuntamiento de segunda categoría, auxiliares de los cuerpos de la administración, oficiales judiciales, etcétera.<sup>16</sup> Entre las asignaturas aparecían algunas no estrictamente jurídicas como Sociología, Geografía política y económica, Estadística; y algunas novedades como Derecho agrario, Derecho de nuestras plazas en África, Derecho militar, Derecho sindical, Historia e instituciones del derecho germánico, etcétera. Pero este proyecto fue reformado en profundidad. De nuevo en 1944 el Consejo nacional de educación deliberó sobre el reglamento de la facultad.<sup>17</sup> El asunto era urgente, pues ya estaba vigente la LOUE. Esta ley había impuesto en toda la universidad una organización académica por cuatrimestres y, provisionalmente, una orden transcribió las disciplinas que –para el curso académico 1943–1944 y a la espera de los decretos que debían organizar las distintas facultades– formaban el primer curso de la licenciatura en derecho.<sup>18</sup>

Cuatrimestre primero: Principios de derecho natural, Historia e instituciones de derecho romano, Economía y estadística.

Cuatrimestre segundo: Principios de derecho público, Historia e instituciones de derecho romano, Economía y estadística.

Se formó así un plan provisional para los alumnos que comenzaban la carrera ese curso académico.<sup>19</sup> Ante esta situación, la aprobación del decreto no podía

15 ACE 76818, sesiones de 21 y 22 de julio de 1942. ACE 76796, sesiones de 27 y 28 de julio, 3, 4 y 5 de agosto de 1942. Los ponentes fueron Moeva y Sancho Izquierdo.

16 Para la obtención del grado era necesario cursar las siguientes asignaturas: Introducción al derecho y derecho natural.– Derecho político.– Derecho civil general y derechos reales.– Penal, parte general.– Civil (inmobiliario y obligaciones).– Penal, parte especial.– Derecho administrativo.– Procesal (teoría general y penal).– Civil (familia y sucesiones).– Derecho mercantil.– Procesal (civil y contencioso).– Hacienda.– Deontología profesional.

17 ACE 76818, sesión de 27 de mayo de 1944. ACE 76796, sesión de 2 de junio de 1944. Los ponentes fueron Sancho Izquierdo y Torres López.

18 Orden de 5 octubre 1943.

19 Como enseguida se verá, el decreto de ordenación de la facultad de derecho establecía (disposición transitoria 4.ª) que “los alumnos que en el curso 1943–1944 hubiesen aprobado todas las asignaturas para el primer curso de la Facultad de Derecho, se considerará que tienen aprobado el primer curso completo del plan establecido por este Decreto [...]”. Más tarde, por orden de 1 mayo 1946 se intentaba solucionar algunos de los problemas ocasionados

demorarse. El Consejo nacional de educación propuso considerables modificaciones al proyecto, aunque se admitía que si vamos a fijarnos mucho en ciertos detalles –sobre todo en la distribución de disciplinas a lo largo de la carrera– no acabaremos nunca. Quizá no fuera exagerar decir que cada uno tenemos ‘nuestro’ plan.<sup>20</sup> Lo importante, sostenía, era ampliar el derecho civil a cuatro años y no recargar al alumno con muchas horas lectivas.

Finalmente, el 7 de julio de 1944 se firmó el decreto sobre ordenación de la facultad de derecho.<sup>21</sup> En el camino las cosas habían cambiado sustancialmente: la facultad de derecho se configuraba en una sola sección, no se contemplaba el grado de bachiller, el plan de licenciatura era unitario, sin especialidades ... Siguiendo la estela de la LOUE, el decreto asignaba a la facultad tres funciones: la enseñanza de la ciencia del derecho, la formación profesional<sup>22</sup> y el cultivo de la investigación científica.

Para seleccionar a los alumnos, existía un examen de ingreso a la facultad, estructurado en tres partes: un resumen de una lección dada por un profesor, la traducción de un texto en lengua moderna y de otro en latín. Los admitidos hacían un juramento en el acto de apertura de curso, después se les entregaba un libro escolar –rojo, como el color de la facultad– en el que se consignaba las incidencias de la vida académica del estudiante.

La enseñanza se distribuía en diez cuatrimestres, dos por cada curso académico: el primero empezaba el 5 de octubre y concluía el 14 de febrero, el segundo comenzaba el 15 de febrero y terminaba el 15 de junio. Entre las asignaturas que formaban el plan de estudios aparecía la novedad del Derecho del trabajo.<sup>23</sup>

Primer curso. Cuatrimestre primero: Derecho Natural, cuatro horas semanales.– Historia e Instituciones del Derecho Romano, cinco horas semanales.– Historia del

por la existencia de este plan provisional de 1943. En concreto el motivado por la asignatura de historia del derecho, que esos alumnos no habían cursado en primero y que llegados a cuarto se encontraban con la parte correspondiente al derecho privado, penal y procesal. MARTÍNEZ NEIRA, *La facultad de derecho de Salamanca*, cit., pp. 161 ss.

20 Las propuestas de modificación como las entrecomilladas palabras pertenecen al ponente Sancho Izquierdo.

21 El decreto puede verse en MANUEL MARTÍNEZ NEIRA, *El estudio del derecho. Libros de texto y planes de estudio en la universidad contemporánea*, Madrid 2001, pp. 306–315.

22 Para canalizar esta función, el decreto de 2 abril 1955 creaba, dependientes de las facultades de derecho, las escuelas de práctica jurídica.

23 Por orden de 24 agosto 1945 se corrigió un error material de la redacción del plan. En el sexto cuatrimestre se decía “Derecho civil (derechos reales y derecho matrimonial)” cuando debería decir “Derecho civil (derechos reales)”.



Derecho Español (fuentes e instituciones político-administrativas), cuatro horas semanales.– Economía Política, tres horas semanales.

Cuatrimestre segundo: Derecho Natural, cuatro horas semanales.– Historia e Instituciones del Derecho Romano, cinco horas semanales.– Derecho Político (teoría de la sociedad), tres horas semanales.– Economía Política, cuatro horas semanales.

Segundo curso. Cuatrimestre tercero: Derecho Canónico (fuentes y derecho público eclesiástico), cinco horas semanales.– Derecho Político (teoría de la organización política), cuatro horas semanales.– Derecho Civil (introducción al derecho civil y derecho de las personas), tres horas semanales.– Derecho Penal (parte general), cuatro horas semanales.

Cuatrimestre cuarto: Derecho Canónico (instituciones y derecho matrimonial), cinco horas semanales.– Derecho Político español y extranjero, cuatro horas semanales.– Derecho Civil (introducción al derecho civil y derecho de las personas), tres horas semanales.– Derecho Penal (parte general), cuatro horas semanales.

Tercer curso. Cuatrimestre quinto: Derecho Civil (derechos reales y derecho hipotecario), cuatro horas semanales.– Derecho Administrativo (parte general), cinco horas semanales.– Derecho Internacional Público, tres horas semanales.– Derecho Penal (parte especial), cuatro horas semanales.

Cuatrimestre sexto: Derecho Civil (derechos reales), cinco horas semanales.– Derecho Administrativo (parte especial), cinco horas semanales.– Derecho Internacional Público, tres horas semanales.– Hacienda Pública (principios generales), cuatro horas semanales.

Cuarto curso. Cuatrimestre séptimo: Derecho Civil (derecho de obligaciones y contratos), cuatro horas semanales.– Derecho Administrativo (parte especial), tres horas semanales.– Derecho Procesal (organización y procedimiento civil), cinco horas semanales.– Hacienda Pública (derecho fiscal), cuatro horas semanales.– Derecho del Trabajo, dos horas semanales.

Cuatrimestre octavo: Derecho Civil (derecho de obligaciones y contratos), cuatro horas semanales.– Derecho Procesal (procedimiento civil y penal) tres horas semanales.– Derecho del Trabajo, tres horas semanales.– Historia del Derecho Español (privado, penal y procesal), tres horas semanales.– Derecho Mercantil (conceptos generales, comerciante individual y sociedades), tres horas semanales.

Quinto curso. Cuatrimestre noveno: Derecho Civil (derecho de familia y sucesiones), cuatro horas semanales.– Derecho Procesal (procedimientos especiales), cuatro horas semanales.– Derecho Mercantil (títulos, valores y contratos) cinco horas semanales.– Derecho Internacional Privado (parte general) tres horas semanales.

Cuatrimestre décimo: Derecho Civil (derecho de familia y sucesiones), cuatro horas semanales.– Derecho Mercantil (quiebras y derecho marítimo), cinco horas semanales.– Derecho Internacional Privado (parte especial), tres horas semanales.– Filosofía del Derecho, cuatro horas semanales.

Se incidía en la formación práctica, orientación que también recogía el examen de grado. En efecto, el titular de cada asignatura debía proponer al decano la fijación de una o dos horas semanales para la realización de las prácticas correspondientes. Además, aprobadas todas las disciplinas del periodo de licenciatura, el candidato al grado de licenciado en derecho debía realizar una prueba final ante un tribunal de cinco catedráticos: el examen constaba de tres pruebas, de las que dos eran prácticas.

Para la colación del grado de licenciado en derecho era requisito indispensable haber aprobado “las [disciplinas] especiales de carácter religioso y político y haber realizado los ejercicios físicos y deportivos y demás cursos que para la formación completa del escolar preceptúa la Ley de Ordenación de la Universidad española”.

En las disposiciones transitorias se establecía que la reforma se realizaría por años y de manera sucesiva, de forma que no se repitiese el mismo curso del antiguo y nuevo plan. El plan provisional de 1943 se entendía como el primer año de este nuevo; así, en el año académico 1944-1945 funcionaban ya los dos primeros cursos del nuevo plan, mientras que tercero, cuarto y quinto continuaban desarrollándose por el plan a extinguir.

El Ministerio se reservó la potestad de distribuir a los catedráticos según la nueva organización, aunque en la facultad de derecho esto apenas afectó. Para la nueva asignatura de Derecho del trabajo sólo existiría un catedrático en Madrid, su enseñanza en las demás universidades estaría encomendada a un encargado de cátedra.

Junto a los catedráticos, la facultad contaba para atender la docencia con un número determinado de profesores auxiliares numerarios de universidad. La implantación del nuevo plan de estudios exigía distribuirlos nuevamente por materias o grupos de materias, y valorar si su número era suficiente.<sup>24</sup>

Con la progresiva aplicación de la LOUE, esos profesores auxiliares fueron sustituidos por los llamados profesores adjuntos.<sup>25</sup> El nombramiento de adjunto se hacía por cuatro años renovable por otros cuatro, previo concurso oposición convocado por el Ministerio. Los ejercicios se celebraban ante un tribunal de tres catedráticos numerarios designados por la junta de facultad respectiva.

### 3 Revisar el modelo: el decreto de 1953

El decreto de 7 de julio de 1944 abrió el cauce a las modificaciones que, en los planes de estudios, fueran precisas una vez transcurridos cinco años desde su promulgación. De conformidad con estas previsiones, que reconocían la necesidad de renovar los planes de enseñanza, el departamento ministerial dictó órdenes, con fecha 23 de diciembre de 1950, por las que se nombró una

24 Para ello el Ministerio pidió información. Orden de 26 julio 1946.

25 Orden de 5 diciembre 1946. La plantilla de profesores auxiliares numerarios de universidad era declarada a extinguir. Y de entrada incluso los nuevos adjuntos cobrarían las mismas 6.000 pesetas anuales que cobraban los auxiliares.

comisión encargada del estudio de la reforma del plan de estudios vigente en la facultad de derecho.

En abril de 1951 el Consejo nacional de educación estudió el proyecto de modificación.<sup>26</sup> El proyecto fue calificado de aceptable pues recogía la experiencia del primer quinquenio de vigencia del plan de 1944. En primer lugar propugnaba la supresión del régimen de cuatrimestres, no se entendía su utilidad pues la duración normal de las disciplinas era el año académico, de hecho en la práctica muchos profesores no se atenían en sus explicaciones a esa división. Además, esa estructura cuatrimestral prolongaba los periodos constituyentes de los cursos y multiplicaba sin provecho el número de exámenes, tampoco coincidía con los periodos de vacaciones. Incluso, estimaba beneficioso agrupar ciertas disciplinas que en el proyecto aparecían distribuidas en dos cursos de clase alterna: ninguna desventaja veía en reunir las en un solo curso con mayor número de lecciones, suprimiendo así un examen y considerando las asignaturas en su unidad. En fin, preocupaba el acceso del alumnado a la facultad y se proponía que el primer curso tuviese un carácter preparatorio y selectivo.

Junto a las propuestas de las facultades y de la junta de decanos, otros informes perfilaron las líneas generales de los proyectos del Ministerio de educación nacional, que fueron completadas con las conclusiones de la asamblea de universidades.

En efecto, por orden de 6 de marzo de 1953 se convocó una asamblea de las universidades españolas con la intención de abordar los principales asuntos para la mejor ordenación de los distintos aspectos de la vida universitaria. A ella acudieron los rectores y juntas de gobierno de las doce universidades, decanos y representaciones de todas las facultades universitarias. Se celebró en Madrid, entre los días 11 y 16 de julio de 1953. Su preparación fue confiada a una comisión que elaboró el siguiente temario: 1. Personal universitario docente; 2. Selección del alumnado universitario; 3. Planes de estudios; 4. Régimen jurídico y económico de la universidad; 5. Temas varios.

Para cada tema se designó una ponencia oficial, se animó a la participación y se pidió que las facultades evacuasen lo antes posible un dictamen sobre los planes de estudios, incluyendo en el mismo las cuestiones complementarias sobre calendario escolar, problema de los cuatrimestres, etcétera. Se indicó asimismo que estos escritos debían tener un carácter razonado e incluir todas las sugerencias que estimasen convenientes. Se trataba, en definitiva, de tomarse en serio la asamblea. Para facilitar el trabajo, la comisión organizó

26 ACE 76489, expediente núm. 893. El ponente fue Ruiz del Castillo, catedrático de derecho político de la Universidad de Madrid.

la publicación a través de una serie de boletines y circulares de esas ponencias y demás noticias.<sup>27</sup>

La lectura de las actas de esta asamblea nos muestra un giro o inflexión que se produjo en los años cincuenta: si los cuarenta habían estado dedicados a elaborar el modelo de la universidad nueva, ahora se apreciaba con claridad la distancia que había entre los postulados legales y la realidad, y eran éstos los asuntos que discurrieron por la asamblea. Se planteó así el desinterés de los universitarios por la formación religiosa, la función de los colegios mayores, la autonomía universitaria, la crisis de la universidad ... El modelo de la LOUE se estimaba válido, pero a la luz de diez años de experiencia la asamblea acometió su revisión.

En lo que concierne a la enseñanza jurídica, las actas recogen siete ponencias (Santiago, Valencia, Salamanca, Murcia, Zaragoza, Madrid y Valladolid) además de las conclusiones de la subcomisión de planes de estudios de derecho. En estas ponencias se reflejan distintos enfoques: la necesidad de establecer asignaturas opcionales junto a las obligatorias,<sup>28</sup> el peligro del positivismo jurídico en la formación universitaria,<sup>29</sup> un mayor enfoque profesional de los estudios,<sup>30</sup> la supresión de los cuatri-

27 La primera circular tiene fecha de 23 abril 1953. En total –que yo sepa– se publicaron sesenta y siete circulares y seis boletines (uno por cada día que duró la asamblea).

28 Facultad de derecho de Santiago, circular núm. 9. Defendía la existencia de asignaturas básicas y especiales. Las primeras serían obligatorias en todas las universidades, las segundas (más breves) serían optativas y variarían de universidad en universidad. Entre estas últimas se proponían, a modo de ejemplo, Derecho constitucional extranjero, Derecho foral, Derecho comparado, Política internacional, Derecho de seguros ... Entre las primeras no había novedades.

29 Facultad de derecho de Valencia, circular núm. 19. Presentaba un plan de estudios precedido de una extensa justificación. En ella se defendía que la función de las facultades de derecho era la formación de juristas, y para ello no podía olvidarse que el fundamento del derecho se encuentra en el derecho natural, que por ello debe teñir todo el plan. Esto no quería decir aumentar los años de esa materia, sino que todas las asignaturas debían plantearse desde los postulados iusnaturalistas y no positivistas. Además, aunque la expansión que el sector público había desarrollado a lo largo del siglo XX había dejado desfasadas a las facultades de derecho, seguía siendo importante dar la extensión debida a las materias formativas, pues la técnica era concebida como mera aplicación de principios. Por eso, aun prestando atención preferente a esas nuevas facetas jurídicas proponía un plan de estudios largo (siete años contando uno preparatorio) con gran carga de materias formativas (Derecho natural, Derecho romano, Derecho canónico, Sociología, Economía, Parte general del derecho civil, Parte general del derecho político y administrativo).

30 Facultad de derecho de Salamanca, circular núm. 32. Presentaba dos propuestas, una firmada por Clavero Arévalo, la otra por distintos profesores. En

mestres,<sup>31</sup> o una orientación científica de los estudios.<sup>32</sup> La subcomisión de planes de estudios de derecho<sup>33</sup> propuso un nuevo plan de estudios, idéntico al posteriormente aprobado salvo un matiz,<sup>34</sup> además llegó a las siguientes conclusiones: se proponía la existencia de un curso selectivo de calificación conjunta, la supresión de los cuatrimestres, la integración en la universidad de todas las escuelas o institutos, la organización de cursos complementarios puntuables para las oposiciones, la obligatoriedad de la reválida y la unificación de convocatorias de exámenes.

Finalmente, por decreto de 11 de agosto de 1953 aparecieron los nuevos planes de estudios, entre los que se incluía el de la facultad de derecho.<sup>35</sup> La enseñanza del periodo de licenciatura se dividía en cinco cursos anuales, desaparecía por tanto la estructura cuatrimestral.

Curso primero: Derecho natural.– Historia e Instituciones del Derecho romano.– Historia del Derecho.– Derecho político.– Prácticas de lectura de textos jurídicos clásicos (latinos y españoles).

Curso segundo: Derecho político.– Derecho canónico.– Derecho civil (parte general).– Derecho penal (parte general).– Economía política.

Curso tercero: Derecho administrativo.– Derecho civil (obligaciones y contratos).– Derecho internacional público.– Derecho penal (parte especial).– Hacienda pública.

Curso cuarto: Derecho administrativo (parte especial).– Derecho del trabajo.– Derecho civil (derechos reales e hipotecario).– Hacienda pública (con especial atención al Derecho fiscal).– Derecho procesal.– Derecho mercantil.

la primera se defendía, en conformidad con la LOUE, que el ingreso en los cuerpos jurídicos de la administración pública debían estar íntimamente unidos a los estudios universitarios y, en concreto, a la facultad de derecho. Así se proponía un plan de estudios de cuatro o cinco años comunes, cuya aprobación capacitaría para la profesión de abogado; después existirían diversos planes de especialización de acuerdo con los cuerpos jurídicos del Estado. En la segunda propuesta se optaba por un plan de especialidad (privado, público, penal) en el último año.

31 Era una idea compartida, salvo por Salamanca. Así lo manifestaba la facultad de derecho de Murcia (circular núm. 45) que se remitía a un acuerdo de 1951; la de Zaragoza (circular núm. 45) que proponía además unas Prácticas forenses y de redacción de instrumentos públicos y privados; y la de Madrid (circular núm. 61).

32 Comunicación firmada por Eustaquio Galán de la facultad de Valladolid, circular núm. 66. Proponía una licenciatura organizada en siete cursos. Rechazaba una orientación de especialización profesional y profundizaba en los aspectos formativos, concediendo gran importancia a una visión historicista del fenómeno jurídico. Intentaba elevar el nivel de exigencia y dignificar el título académico de derecho.

33 Boletín núm. 5.

34 Historia del derecho aparecía en segundo curso, y Economía en primero.

35 El decreto puede verse en MARTÍNEZ NEIRA, *El estudio del derecho*, cit., pp. 316-318.

Curso quinto: Derecho civil (familia y sucesiones).– Derecho procesal.– Derecho mercantil.– Derecho internacional privado.– Filosofía del Derecho.

Se indicaba, además, que las facultades de derecho debían organizar un curso de Sociología, con especial referencia a los problemas jurídicos, que tenía carácter obligatorio; también otros de Contabilidad, aunque éstos serían voluntarios.

El primer año tenía carácter formativo y selectivo, y los alumnos no podían matricularse en el segundo curso sin haber superado las pruebas de selección que se calificarían en conjunto y con sistema de compensación. Al concluir los cinco cursos, el alumno podía realizar la prueba de licenciatura, ante tres catedráticos. Consta de tres ejercicios, uno teórico y dos prácticos.

El decreto pretendía iniciar un sistema de mayor autonomía pedagógica, en el que cada facultad pudiese adaptar los estudios y sistemas de trabajo a sus necesidades docentes y científicas, sin perjuicio de las enseñanzas básicas. En este sentido, podía proponer al Ministerio la creación de disciplinas de carácter complementario para la mejor formación de sus alumnos,<sup>36</sup> las incompatibilidades, el horario semanal de las distintas materias ...

Sobre la nueva asignatura de Prácticas de lectura de textos jurídicos, el Ministerio aclaró que el objeto de esta asignatura no era el análisis “de instituciones cuyo estudio es propio de otras asignaturas”, sino “determinar el sentido de las distintas fases históricas de la mentalidad jurídica y de la concepción del derecho”.<sup>37</sup> Sin embargo, tanto esta materia como la Sociología y la Contabilidad –las tres novedades curriculares– tuvieron una vida ciertamente efímera.<sup>38</sup>

#### 4 Reformar la institución: el problema universitario de los años sesenta

Aunque la LOUE estuvo vigente hasta 1970, lo cierto es que bastante antes empezó a ser cuestionada.<sup>39</sup> La contestación se identificó con el llamado problema universitario. Dicho problema o cuestión evidenciaba una crisis de crecimiento, no sólo cuantitativa sino también cualitativa. Es decir, el fenómeno de masificación que comenzó a perfilarse en esos años supuso tanto un incremento del número de alumnos matriculados en las universidades

36 Así lo hizo la Universidad de Santiago de Compostela, como veremos.

37 Orden de 18 marzo 1954, por la que se daban instrucciones para la realización del examen de esa asignatura.

38 Por decreto de 14 setiembre 1956 se suprimieron del plan de estudios las tres asignaturas.

39 MANUEL MARTÍNEZ NEIRA, “La facultad de derecho en los años sesenta. Creación de departamentos y nuevos planes de estudios”, *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*, 8 (2005), pp. 117–178.

como un cambio en su configuración social. El crecimiento económico y también la reforma del bachillerato facilitaron el acceso de nuevos grupos sociales a la universidad. Así, la masificación precipitó el paso de una universidad elitista a una universidad de masas (se hablaba de democratización de la universidad). Esa inédita universidad –verdadera novedad en la España contemporánea– no encajaba bien en los esquemas y moldes de la LOUE, ley que a pesar de sus declaraciones seguía proponiendo una universidad elitista y centralizada. Este desfase entre la realidad social y la estructura legal provocó una crítica y distintos intentos de reforma que de entrada fueron parciales y después cristalizaron en una nueva ley.

Lo dicho hasta ahora sobre la universidad es aplicable a las facultades de derecho que continuaban reguladas, en lo esencial, por el decreto sobre ordenación de 1944. Frente al orden construido en los años de posguerra ahora comenzarán las reformas. Reformas que estaban presididas por una idea clara: la necesidad de profundizar en la autonomía universitaria.

Un hito podemos situarlo en la asamblea de profesores de facultades de derecho celebrada en 1964. Allí se discutieron los graves problemas que pesaban sobre la facultad y para solucionarlos se propuso cambiar el plan de estudios vigente por otro articulado en especialidades, suprimir las enseñanzas complementarias –los cursos de religión, política y educación física–, renovar los métodos de enseñanza dando más protagonismo al alumno, mejorar la formación previa de los que accedían a la facultad, pero se rehusó modificar la estructura de la cátedra.

El Ministerio –cuyo titular era Lora Tamayo (1962–1968)– actuó con celeridad a la hora de acometer las reformas. Aunque reconocía que la ley de 1943 debía ser sustituida, prefirió avanzar paso a paso, con cambios concretos que sirviesen además de experiencia para acometer la aprobación de una nueva ley de educación.

Comenzó precisamente con el asunto que la asamblea había intentado esquivar, la creación de una nueva estructura que sustituyese a la cátedra y que se denominó departamento en la ley aprobada en 1965.<sup>40</sup> El departamento nacía para integrar a todos los profesores de disciplinas afines bajo la dirección de un catedrático, constituía así una unidad que servía para coordinar las enseñanzas y mejorar la dotación de medios de investigación. Por un decreto

40 Ley sobre estructura de las facultades universitarias y su profesorado, de 17 de julio de 1965. Un estudio sobre esta ley y sobre la constitución de los departamentos en las distintas facultades de derecho puede verse en MARTÍNEZ NEIRA, *La facultad de derecho en los años sesenta*, cit., pp. 133–160.

fechado el 1 de junio de 1967 se estructuró la facultad de derecho en nueve departamentos.<sup>41</sup>

La resistencia estaba anunciada. En general, no existieron grandes problemas para constituir departamentos unidisciplinarios en los que sólo existía un catedrático. En esos casos realmente el cambio era más bien nominal. Pero cuando se trataba de agrupar disciplinas afines en las que existían varios catedráticos bajo la dirección de uno sólo las dificultades emergieron. Algunos de esos catedráticos permanecieron al margen de los nuevos departamentos, otros propusieron la creación de departamentos unidisciplinarios no previstos por el Ministerio. Pero éste auxiliado por el Consejo nacional de educación se mostró firme y no permitió que de momento se desvirtuase el espíritu de la norma.

La afinidad de las disciplinas buscada en la constitución de los distintos departamentos sirvió para reflexionar sobre la naturaleza científica del derecho romano, el protagonismo del derecho mercantil, el contenido del derecho político, las diferencias existentes entre el derecho internacional

- 41 1. Departamento de filosofía del derecho, que agrupaba Derecho natural, Filosofía del derecho y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de “Derecho natural y filosofía del derecho”.— 2. Departamento de derecho romano e historia del derecho, que agrupaba Historia e instituciones de derecho romano, Historia del derecho español y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de “Derecho romano” y las de “Historia del derecho español”.— 3. Departamento de derecho canónico, que agrupaba la disciplina de tal nombre y otras afines. A él podían adscribirse las cátedras de “Derecho canónico”.— 4. Departamento de derecho político y derecho internacional, que agrupaba Derecho político, Derecho internacional público, Derecho internacional privado y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de “Derecho político”, “Derecho internacional público y privado” y “Estudios superiores de derecho internacional”.— 5. Departamento de derecho administrativo y derecho del trabajo, que agrupaba las disciplinas de igual título y otras afines. A él podían adscribirse las cátedras de “Derecho administrativo” y “Derecho del trabajo”.— 6. Departamento de derecho civil y derecho mercantil, que agrupaba Derecho civil (en su parte general, obligaciones y contratos, derechos reales e hipotecario y familia y sucesiones), Derecho mercantil y las disciplinas afines a una y otra. A él podían adscribirse las cátedras de “Derecho civil” y las de “Derecho mercantil”.— 7. Departamento de derecho penal, que agrupaba la disciplina de tal nombre (en sus partes general y especial) y otras afines. A él podían adscribirse las cátedras de “Derecho penal”.— 8. Departamento de derecho procesal, que agrupaba Derecho procesal y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de “Derecho procesal”.— 9. Departamento de disciplinas económicas y financieras, que agrupaba Economía política, Hacienda pública, Derecho fiscal o Derecho financiero y otras disciplinas afines. A él podían adscribirse las cátedras de “Economía política”, “Economía política y hacienda pública” y “Hacienda pública y derecho fiscal”.



privado y el público, la relación entre la hacienda pública y el derecho financiero ...

En estos departamentos universitarios junto a los catedráticos apareció una nueva figura, los agregados. Este nuevo tipo de profesor –con dedicación plena y responsabilidad docente e investigadora– se creaba para mejorar una ratio profesor/alumno insuficiente; problema que el número creciente de alumnos no hacía sino agudizar.

Ya con Villar Palasí (1968–1973) la apreciada autonomía fue la seña de identidad de los nuevos centros que se crearon en virtud del decreto-ley de 1968 sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria.<sup>42</sup> Estas nuevas facultades y universidades adoptaron un nuevo currículum para la formación de sus alumnos. Con estos centros se quería ensayar la reforma, pero también respondían a la demanda existente; por ello se establecía una nueva universidad en Madrid –la ciudad más castigada por la masificación– y más tarde se creó una universidad a distancia.

El llamado problema universitario tenía que ver también con los planes de estudios. Frente al plan vigente de 1953 –que era un plan unitario, articulado en cinco cursos anuales–, los profesores reunidos en Barcelona –ya lo he apuntado– propusieron la elaboración de uno nuevo compuesto de tres años comunes y dos de especialización en las siguientes ramas: forense, político-administrativa, económico-empresarial, histórica-filosófica.

Un año después de la celebración de la asamblea, las facultades de derecho de Sevilla y Valencia elevaron al Ministerio la propuesta de iniciar, por vía de

42 Decreto-ley de 6 de junio, sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria. La norma avanzaba hacia un nuevo sistema de formación universitaria, pero estas reformas eran aplicadas sólo a los nuevos centros docentes que se creaban en virtud de la misma: las nuevas universidades de Madrid y Barcelona, la Universidad de Bilbao, y las facultades universitarias en Santander, San Sebastián y Badajoz.

En los planes de estudios aprobados para las respectivas facultades de derecho se observan también las líneas de la reforma: orden de 15 julio 1969 por la que se acuerda aprobar la propuesta de plan de estudios estructurado en dos ciclos, para la facultad de derecho de San Sebastián, de la Universidad de Valladolid; orden de 18 septiembre 1971 por la que se aprueba provisionalmente el plan de estudios de la facultad de derecho de la nueva Universidad Autónoma de Madrid; orden de 25 enero 1972 por la que se aprueba provisionalmente el plan de estudios del primer curso de la facultad de derecho de la nueva Universidad Autónoma de Barcelona.

Aunque, la facultad de San Sebastián aplicó el plan de 1953 a partir del curso 1972–1973. Orden de 27 septiembre 1972 por la que se autoriza a la facultad de derecho de San Sebastián a aplicar el plan de estudios vigente en la facultad de derecho de Valladolid.

ensayo, en el curso académico 1965-1966, un nuevo plan de estudios.<sup>43</sup> Para su elaboración habían tenido en cuenta las conclusiones de la asamblea apenas mencionada, las experiencias extranjeras y la necesidad de adaptar los estudios jurídicos a las necesidades sociales que demandaban de los juristas una cierta especialización. Veamos cómo se gestó el nuevo plan.

La junta de la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla en sus sesiones celebradas los días 25 y 26 de mayo de 1965 acordó por unanimidad elevar al Ministerio de educación nacional la reforma del plan de estudios.<sup>44</sup>

En su justificación se indicaba que la sociedad y su complejidad jurídica demandaban, junto al mantenimiento de una formación general, un cierto grado de especialización. En el plan de estudios propuesto se lograba lo primero manteniendo todas las asignaturas básicas y formativas; lo segundo, determinando tres grupos de materias. El primero de los grupos versaba sobre derecho público, con él se pretendía “iniciar en la especialidad a quienes han de ingresar en los Cuerpos de funcionarios de la Administración pública, y a quienes han de ejercitar la abogacía libre en materias administrativas o tributarias”. El segundo grupo de materias intensificaba los estudios jurídicos relacionados con la empresa, los problemas laborales, los temas fiscales y económicos. Se trataba “de iniciar en la especialización con este grupo a los muchos juristas que han de trabajar en empresas o en organizaciones sociales”. El tercer grupo de materias intensificaba los estudios de las disciplinas de derecho privado, penal y procesal. Pretendía “iniciar la orientación profesional de aquellos que han de ejercer la abogacía tradicional, de quienes aspiren al ingreso en la carrera judicial y en las de Registro y Notariado”.

El plan constaba de cinco cursos, tres comunes y dos de especialización según los grupos de materias ya analizados. Los comunes con cinco asignaturas cada uno, los de especialización con seis. En todos se intentaba no cargar al alumno, limitando el número de horas de cada materia.

Este inicio de especialización intentaba también abordar el “grave problema” de las salidas profesionales de los alumnos de las facultades de derecho, y conectar la facultad con el ingreso en la administración pública.

El contenido del plan propuesto coincidía prácticamente con el que después aprobó el Ministerio: los años comunes son exactos, los de especialización sólo difieren en un pequeño cambio.

43 La propuesta de la Universidad de Sevilla lleva fecha de 7 de junio de 1965, la de Valencia de 14 de julio de 1965. Ambas en Archivo general de la administración (AGA), Educación (05), IDD 1016, 20269.

44 En AGA (05) IDD 1016, 20269 aparece la certificación firmada por el secretario de la facultad, José Martínez Gijón, con la transcripción del plan de estudios.

Se añadía finalmente un inciso de carácter didáctico: “Se procurará modificar en lo posible los métodos pedagógicos.” Se trataba de intensificar el sistema de seminarios de investigación y clases prácticas. Así, en los cursos de especialización debían organizarse dos seminarios anuales, uno práctico y otro teórico. En ellos intervendrían varios catedráticos, para que cada uno analizase la cuestión desde la perspectiva propia de su disciplina.

El rectorado de la Universidad de Sevilla informó favorablemente el proyecto y lo remitió al Ministerio el 8 de junio de 1965. El proyecto pasó al Consejo nacional de educación. Su sección primera estimaba muchos aspectos del plan propuesto por Sevilla, pero al mismo tiempo no compartía la oportunidad de su tramitación en un momento en que también estaba fraguándose la ley que modificaba las estructuras universitarias. La comisión permanente del Consejo hizo suyo el informe de la sección primera pero entendía que no le correspondía determinar “la oportunidad o no del momento actual para la instauración de nuevos Planes de estudios”.<sup>45</sup>

Casi simultáneamente, la facultad de derecho de la Universidad de Valencia tramitaba otro proyecto de “revisión y actualización del plan de estudios”.<sup>46</sup> La junta de la facultad de derecho celebró los días 19 de junio y 7 de julio de 1965 dos sesiones para tratar de la actualización y readaptación del plan. En la primera de ellas se adoptó por voto unánime de los asistentes “la necesidad de actualizar y readaptar el Plan de estudios actualmente vigente en las Facultades de Derecho”. Tal reforma debía realizarse siguiendo las líneas generales establecidas en la asamblea de Barcelona y en el proyecto de reforma de Sevilla.

En la segunda sesión se aprobó el proyecto. Poco difería del sevillano, reproducía una misma justificación y opción pedagógica, y proponía una misma estructura: tres años comunes (idénticos a los de Sevilla) y dos de especialización. Éstos se estructuraban también en tres grupos, con la misma denominación. Sin embargo, su contenido variaba ligeramente: por un lado, junto a cursos anuales aparecían otros cuatrimestrales; por otro, el número de materias era menor, cinco frente a las seis de Sevilla. Otra novedad era que el proyecto de Valencia hablaba ya de departamentos y de agregados, aunque la ley que regulaba a unos y otros aún no se había aprobado.

El decano de Valencia envió el 14 de julio al rectorado el proyecto para su tramitación. El rectorado lo informó favorablemente y lo envió al Ministerio el 16 de julio.

45 Expediente 26768, de 16 julio 1965.

46 En AGA (05) IDD 1016, 20269 aparece la certificación firmada por el secretario de la facultad, Manuel Broseta Pont, con la transcripción del plan de estudios.

Aunque la facultad de Valencia se remitía a la asamblea de Barcelona y al plan sevillano, lo cierto es que existía otro precedente. El 13 de diciembre de 1963, el catedrático de derecho del trabajo de la Universidad de Valencia –Efrén Borrajo Dacruz– había presentado para su discusión en junta de facultad una comunicación sobre la revisión del plan de estudios.<sup>47</sup>

Borrajo concebía el derecho como una ciencia social y por ello proponía una formación no meramente jurídica para el alumno de una facultad de derecho. Fundamentaba su postura en distintas fuentes: las conclusiones del coloquio sobre la enseñanza del derecho celebrado en 1952 en Cambridge, la reforma francesa de 1954, el contenido del temario de las pruebas de ingreso en los cuerpos técnicos de la administración, y el elevado número de convalidaciones que existían entre la facultad de ciencias políticas, económicas y comerciales y la facultad de derecho. Pero, al margen de otros conocimientos, su propuesta era deudora del informe elaborado por Eisenmann.<sup>48</sup>

El primer asunto que había que dirimir, en opinión de Borrajo, era si los estudios de derecho se organizaban como estudios comunes o habían especializaciones. Así, frente a la uniformidad del plan de 1953 el autor mostraba la

47 Efrén Borrajo Dacruz, *Revisión y actualización del plan de estudios en las facultades de derecho (comunicación)*, Facultad de derecho, Valencia 1963. AGA (05) IDD 1016, 20270.

En la sesión del día siguiente fue repetida como voto particular al que se adhirieron los catedráticos firmantes: Víctor Fairén Guillén, Juan García González, Adolfo Miaja de la Muela, José Navarrete Urieta, José Santa Cruz Teijeiro. La comunicación constaba de tres puntos: 1. Los términos de la cuestión.– 2. Esquemas indicativos del Plan de estudios revisado.– 3. Configuración de la cátedra universitaria de derecho.

48 CHARLES EISENMANN, *Las ciencias sociales en la enseñanza superior: derecho. Con un apéndice dedicado a España por Luis Jordana de Pozas*, Madrid 1958. El Comité internacional de derecho comparado había encargado en 1951 a Niboyet, profesor de la facultad de derecho de París, la redacción de un informe general relativo a la enseñanza del derecho, encuadrado en la encuesta sobre la enseñanza de las ciencias sociales emprendida por la Unesco en 1950. Al morir Niboyet en 1952 fue sustituido por Eisenmann. La encuesta se efectuó en nueve países: Bélgica, Egipto, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Líbano, México y Suecia.

Los días 18 y 19 de julio de 1952 tuvo lugar en Cambridge un coloquio sobre la enseñanza del derecho, organizado por el Comité internacional de derecho comparado. En él se discutieron las cuestiones suscitadas por la encuesta y se manifestó una notable coincidencia de puntos de vista, a pesar de las distintas culturas jurídicas allí presentes.

Las conclusiones de este coloquio –en las que se afirmaba la necesidad de considerar la enseñanza del derecho dentro de las ciencias sociales y así de incorporar en el currículum del jurista algunas de estas materias– así como el proyecto de reforma de la enseñanza del derecho en Francia de 1954 aparecen –junto a unas notas de Jordana de Pozas– como apéndices del libro.

experiencia de las grandes universidades anglosajonas, donde se favorecía la intensidad en el estudio de ciertas materias a través de la existencia de diplomas de especialización y la división de materias entre obligatorias y opcionales.

También la experiencia francesa permitía al alumno elegir entre tres grandes secciones. En este caso existían asignaturas comunes a todos los alumnos y grupos de asignaturas que se organizaban en atención a las especialidades.

En opinión del catedrático valenciano, la especialización facilitaba la dedicación profesional del licenciado en derecho. Ésta permitía al menos hablar de tres secciones: derecho privado (ejercicio de la profesión), de la empresa (gestión y asesoramiento) y público (actividad político-administrativa). Además, la organización de cursos de especialización servía de estímulo para el profesor: evitaba repetir una y otra vez el mismo curso de introducción y permitía mostrar los frutos de su investigación de manera más satisfactoria.

¿Qué materias se estudiarían? El autor estimaba que el plan de 1953 respondía a “una sociedad nacional predominantemente agraria, cerrada en sus fronteras, con abogados que ejercían todo el Derecho en núcleos urbanos pequeños y distantes entre sí”. No respondía a “una sociedad abierta, con un crecimiento masivo de las estructuras industriales y urbanas, con una práctica profesional en la que la división del trabajo es, a la vez, una realidad y una necesidad, en la que el “bufete” será colectivo, en la que el dictamen del especialista será la garantía de los intereses del cliente, etc.”. Proponía por ello mantener las disciplinas jurídico-históricas (el universitario necesitaba una formación cultural que ordene sus conocimientos) y aumentar las profesionales (para que efectivamente sea útil a la sociedad de su momento).

Tras estas consideraciones, ofrecía dos esquemas de trabajo. El primero se trataba de una revisión mínima: mantenía el cuadro de disciplinas existente en el plan de 1953 pero variaba su distribución por cursos. En opinión de Borrajo estaba demostrado que el estudio de una misma materia en dos o más cursos, aunque de hecho no aumente el número de horas dedicadas a su enseñanza, resultaba más racional y profundo. Así, las asignaturas de Derecho romano, Historia del derecho, Derecho canónico y Derecho del trabajo duplicaban sus cursos. Por ejemplo, la Historia del derecho pasaría a segundo curso para continuar el ciclo de estudios históricos (de Roma, general, a España, particular) con tres horas semanales, y en otro año un curso monográfico (posiblemente cuatrimestral).

Aparecía así otra novedad propuesta, la existencia junto a los cursos generales de la disciplina de cursos monográficos. En los primeros se trataba de desarrollar una explicación sucinta con la indicación al alumno de la bibliografía básica; en los segundos el tratamiento monográfico de algunos temas.

Por último, la parte general de Derecho civil se daría en primero. De esta forma el alumno entra en contacto desde el principio con el derecho positivo.

El segundo esquema propuesto suponía una revisión general del plan vigente e introducía la novedad de las especializaciones. Estimaba Borrajo que el número de cursos comunes y de secciones de especialización era algo muy discutible, aunque le parecía oportuno un esquema de tres años comunes y dos de especialización. Las especializaciones serían como mínimo tres, de acuerdo con las salidas profesionales ya analizadas: estudios de derecho privado, estudios de derecho de la empresa, estudios de derecho público. También aquí junto a los cursos generales aparecerían los cursos monográficos. Este segundo esquema fue el defendido más tarde por las facultades valenciana y sevillana.

Pero la reforma de las facultades de derecho no sólo era un problema de organización de las enseñanzas: aparecía íntimamente ligada a la estructura del profesorado. Esa estructura se identificaba con la cátedra y ésta a su vez con el catedrático numerario: los puestos de adjunto y de profesor ayudante carecían de base profesional pues habían sido concebidos como situaciones provisionales, previas a la obtención de la cátedra y con una remuneración escasa.

Frente a esta estructura tan limitada, Borrajo —en sintonía con la propuesta del Ministerio— proponía su redefinición, la cátedra de la nueva facultad de derecho tenía que ser una cátedra-equipo que integrase a un grupo numeroso de profesionales en unidad de acción.

En principio existiría una única cátedra por cada materia científica, así preveía la existencia de catorce cátedras en cada facultad, aunque Madrid y Barcelona por su tamaño podía tener alguna más.<sup>49</sup> El titular de la cátedra sería el catedrático, quien organizaría la actividad docente (con programa propio) y dirigiría la investigación.

Al ser imposible que el catedrático atendiera todos los cursos adscritos a cada cátedra, habría que vincular una o varias agregaciones cuyo titular sería el profesor agregado. El profesor ayudante de clases prácticas mantendría su regulación y funciones. Además se podrían contratar profesores especiales, especialistas en materias concretas. La existencia de estas cátedras-equipo se completaría con la de los institutos de investigación. Borrajo prefería este binomio cátedra-instituto a la existencia de departamentos.

49 Las catorce cátedras eran: Filosofía del derecho, Derecho romano, Derecho político y ciencia social, Derecho civil, Economía política, Historia del derecho, Derecho penal, Derecho internacional, Derecho canónico, Derecho administrativo, Derecho procesal, Derecho del trabajo, Derecho mercantil, Derecho fiscal.

En definitiva, tanto los planes de Sevilla y Valencia como la ponencia de Barcelona bebían de la comunicación de Borrajo que a su vez copiaba el libro de Eisenmann, sobre todo lo referido a la reforma francesa.<sup>50</sup>

En el consejo de rectores celebrado en Santiago el 27 de julio de 1965 el ministro expuso la conveniencia de aceptar provisionalmente y a título experimental los nuevos planes para la facultad de derecho propuestos por las facultades de Sevilla y Valencia. Tras una viva discusión se consideró conveniente que ambos planes se ensayen previo acuerdo entre los decanos de las dos facultades que permitiera su unificación y estableciera claramente la posible convalidación de asignaturas. Así, el Ministerio consideró oportuno acceder a las peticiones y armonizó sendas propuestas. Pensaba que la experiencia de este ensayo serviría para una futura reforma del plan de 1953. Y finalmente aprobó el plan por orden de 13 de agosto de 1965.

La licenciatura se articulaba en cinco cursos, de los cuales los tres primeros eran comunes.

Primer curso: Derecho romano.– Historia del derecho.– Derecho político (ciencia política y derecho de la constitución).– Derecho civil 1.º (parte general).– Derecho natural.

Segundo curso: Derecho canónico.– Derecho penal (parte general).– Economía política y financiera.– Derecho civil 2.º (obligaciones y contratos).– Derecho internacional público.

Tercer curso: Derecho civil 3.º (reales e hipotecario).– Derecho mercantil.– Derecho del trabajo (parte general y contratos de trabajo).– Derecho procesal (teoría general, organización y procesos ordinarios).– Derecho administrativo (parte general).

Los otros dos eran de especialización según distintos grupos: derecho público (grupo A), derecho de la empresa (grupo B) y derecho privado (grupo C).

Grupo A. Cuarto curso: Derecho civil (familia y sucesiones).– Derecho político (ideas y formas políticas).– Derecho administrativo (parte especial).– Derecho penal.– Derecho financiero (parte general).– Historia del derecho público.

Quinto curso: Filosofía del derecho.– Derecho financiero (sistema tributario español).– Derecho administrativo (parte especial).– Derecho del trabajo (seguridad social).– Derecho internacional.

Grupo B. Cuarto curso: Derecho civil (familia y sucesiones).– Derecho financiero (parte general).– Derecho mercantil.– Derecho penal.– Derecho del trabajo (derecho sindical).– Derecho procesal.

Quinto curso: Filosofía del derecho.– Derecho financiero (sistema tributario español).– Derecho administrativo (económico).– Derecho mercantil y derecho de la navegación.– Derecho del trabajo (seguridad social).

50 La reforma francesa de 1954 planteaba romper con la licenciatura única y uniforme que existía que se estimaba incompatible con la gran diversidad de los grupos de profesiones hacia las cuales se orientaban los licenciados en derecho. Para remediarlo instituía tras un periodo inicial común varios ciclos de estudios diferenciados, respondiendo a la distinción de tres grandes grupos de profesiones: las del sector judicial, las del sector administrativo y las del sector económico. EISENMANN, *Las ciencias sociales*, cit., pp. 136 ss.

Grupo C. Cuarto curso: Derecho civil (familia y sucesiones).– Derecho mercantil.– Derecho procesal.– Derecho penal.– Historia del derecho privado.  
Quinto curso: Filosofía del derecho.– Derecho financiero (sistema tributario español).– Derecho mercantil y derecho de la navegación.– Derecho internacional privado.– Derecho agrario.

Para los cursos cuarto y quinto el Ministerio establecía las asignaturas mínimas, a ellas las facultades debían añadir otras; también tenían que indicar su duración (cuatrimestrales o anuales) y su carácter (obligatorias u opcionales), y, por último, debían fijar el número de horas semanales de cada materia.<sup>51</sup>

Cada cátedra organizaría sus clases prácticas, y en los cursos de especialización éstas aglutinarían a varias cátedras. Primero continuaba siendo un curso selectivo, y para pasar a la especialización era preceptivo tener aprobadas todas las asignaturas previas.

Entre las asignaturas del nuevo plan destacaba la novedad del Derecho agrario: no se trataba de una casualidad. Desde el curso 1961–1962, la segunda cátedra de derecho civil de la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla venía organizando cursos de derecho agrario integrados en el ciclo de cursos monográficos del doctorado.<sup>52</sup> Estos cursos constituían un primer intento o ensayo dirigido a una futura consolidación institucional de estos estudios.

En junta de facultad de 16 de mayo de 1963 se discutió sobre ello. Se aludió a cómo René Savatier, J. W. Hedeman y otros juristas prestigiosos habían subrayado la necesidad de la enseñanza de esta disciplina en las facultades de derecho durante el primer congreso internacional de derecho agrario celebrado en Florencia en la primavera de 1954. Y se transcribía el voto formulado en una reunión posterior a dicho congreso por figuras destacadas del mundo jurídico (Ascarelli, Pugliatti, Bolla):

Los estudiosos del Derecho agrario reunidos en Florencia para examinar los resultados científicos del primer Congreso Internacional de Derecho agrario, toman conciencia de la nueva realidad de los fenómenos jurídicos agrarios cual resulta de las investigaciones históricas, comparativistas, exegéticas y dogmáticas, y mientras

51 Resolución de 11 enero 1968 por la que se aprueban los cursos cuarto y quinto del plan de estudios de la licenciatura de derecho en la Universidad de Valencia.

52 En AGA (05) IDD 1016, 20269 aparece la certificación firmada por el secretario accidental de la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, con la transcripción del acuerdo de junta de facultad de 16 de mayo de 1963 sobre creación de una cátedra especial de derecho agrario.

En la asamblea de Barcelona sin embargo esta materia se incluía entre las propuestas por los administrativistas.



reafirman la necesidad de un desarrollo más amplio de los estudios dirigidos a la constatación y profundización de toda la fenomenología social y jurídica del mundo rural, ponen de relieve la necesidad de traducir tales estudios en una difundida y orgánica enseñanza académica, y piden que gradualmente se introduzca la disciplina del Derecho agrario en todas las Facultades de jurisprudencia, especialmente en aquellas que por su situación ambiental deben ser más sensibles a los problemas agrarios.

Enclavada la Universidad de Sevilla en una zona predominantemente agrícola, la facultad de derecho propuso la creación de una cátedra especial dedicada al estudio, enseñanza e investigación del derecho propio de la agricultura, bajo la denominación de Pablo de Olavide.<sup>53</sup> La cátedra, al margen de otras actividades, organizaría unos cursos monográficos con validez académica a efectos del doctorado.

La facultad de derecho de la Universidad de Santiago de Compostela optó por su lado por reformar –sin sustituirlo– el plan de 1953.<sup>54</sup> De conformidad con la propuesta formulada por el decano y con el dictamen emitido por el Consejo nacional de educación, el Ministerio por orden de 10 diciembre 1966 aprobó un elenco de especialidades. Los alumnos, a partir del tercer curso, debían elegir al menos dos de las materias de especialización establecidas.<sup>55</sup>

## 5 Refundar de nuevo: la ley de educación de 1970

El llamado problema universitario se solucionaría con una nueva ley de ordenación universitaria que sustituyese a la de 1943, y que finalmente fue

53 La certificación de esta propuesta se había entregado al ministro de información y turismo, Manuel Fraga, que a su vez entregó al subsecretario del Ministerio de educación, Luis Legaz Lacambra.

54 Decreto de 11 de agosto 1953. Artículo vigésimo. Las distintas Facultades a que se refiere el presente Decreto, podrán proponer al Ministerio de Educación Nacional aquellas modificaciones respecto a los planes que aquí se regulan, que estimen convenientes, a fin de adaptarlos a su propia orientación y peculiaridades docentes y científicas, sin perjuicio de las enseñanzas básicas.– De igual forma podrán proponer la creación de disciplinas de carácter complementario para la mejor formación o especialización de sus alumnos.– Quedan igualmente autorizadas las Facultades para proponer el carácter de intensidad de las labores didácticas dedicadas a cada enseñanza, su ordenación y acoplamiento por cursos, así como la determinación del horario semanal de las mismas.– Al hacer la propuesta, fijarán también el cuadro de incompatibilidades para su aprobación y conveniente publicidad.

55 Derecho privado romano; Historia del derecho privado, penal y procesal; Disciplinas afines y temas especiales de filosofía del derecho; Criminología y ciencia penitenciaria; Organizaciones internacionales; Derecho comparado; Derecho industrial y de los bienes inmateriales; Derecho agrario y derecho foral gallego; Economía política; Economía financiera y derecho financiero; Relaciones entre Iglesia y Estado.

la ley general de educación y financiamiento de la reforma educativa (LGE) de 4 de agosto de 1970. Vino precedida de un gran esfuerzo de estudio y asesoramiento que en parte cristalizó en el denominado libro blanco,<sup>56</sup> publicado en febrero de 1969 como esquema para encauzar la consulta a la sociedad española. Este libro se dividía en dos partes, la primera y más extensa era un análisis de la situación educativa en todos sus niveles –el capítulo quinto afrontaba el problema universitario–, la segunda recogía el avance de las líneas generales de la política educativa que el gobierno se proponía seguir.

Había pasado poco tiempo desde la aprobación de los departamentos y de los nuevos planes de estudios. En el libro blanco se consideraba que debía mejorarse la situación de los profesores adjuntos y de los departamentos, pues éstos (excepto los de filosofía y ciencias) no habían terminado con la descoordinación que provocaba la autonomía de la cátedra. En cuanto a los planes de estudios se avanzaba en su conexión con las salidas profesionales.

La LGE se presentaba como una ruptura frente al esquema de la universidad decimonónica –centralizada y elitista– todavía vigente, olvidando así toda la retórica de la universidad nueva propia de la ley de 1943. Proclamaba la autonomía universitaria; cada universidad se regiría por un estatuto que sería elaborado por su junta de gobierno y aprobado por el gobierno. Sin embargo, el rector –primera autoridad académica– y los decanos serían nombrados por el gobierno.

La ley redefinía la figura de los profesores adjuntos: era requisito ser doctor para acceder a este cuerpo; sus funciones consistían en desarrollar la investigación que se les encomendara, la docencia de los cursos que le fueran asignados y la suplencia por ausencia o vacantes.

El departamento aparecía como una estructura básica. Así el artículo 70.1 afirmaba: “Los Departamentos son las unidades fundamentales de enseñanza e investigación en disciplinas afines que guarden entre sí relación científica. Cada Departamento tendrá la responsabilidad de las correspondientes enseñanzas en toda la Universidad y en él estarán agrupados todos los docentes de las mismas”.

Los planes de estudios, decía el artículo 37.1 de la LGE, debían ser elaborados por las propias universidades de acuerdo con las directrices marcadas por el Ministerio. Estos planes debían comprender un núcleo común de enseñanzas obligatorias y otras optativas. Previo dictamen de la junta nacional de universidades, el Ministerio los refrendaría.

Con cierto retraso,<sup>57</sup> por orden de 23 de septiembre de 1972 el Ministerio aprobó las directrices para la elaboración de los planes de estudios por parte de

56 *La educación en España. Bases para una política educativa*, Madrid 1969.

57 Por decreto de 22 de agosto de 1970 se aprobó el calendario para la aplicación de la reforma educativa, en él se disponía que durante el curso académico

las universidades. De esta manera se trataba de armonizar la validez del título obtenido con la autonomía de la universidad que reconocía la LGE. Secundando lo dispuesto en la ley, establecía que los estudios estarían divididos en tres ciclos: el primero agruparía las materias de contenido eminentemente formativo, el segundo las disciplinas de mayor contenido informativo y el tercero las materias de alta especialización.

Una resolución de la dirección general de universidades e investigación de 7 de julio de 1973 determinó las directrices que debían seguir los planes de estudios de las facultades de derecho. En ella se indicaba las materias obligatorias, que luego las facultades al elaborar los planes debían transformar en disciplinas —señalando si eran cuatrimestrales o anuales así como su horario—, de manera que una materia podía dar lugar a varias disciplinas.

Se quería compaginar un mínimo de formación general con la necesidad de cierta especialización. Para ello el primer ciclo, de enseñanzas básicas y con tres años de duración, sería común para todos los alumnos y su primer curso podía tener carácter coordinado. Las materias obligatorias para este ciclo eran: Derecho administrativo, Derecho canónico, Derecho constitucional, Derecho financiero, Derecho internacional, Derecho mercantil, Derecho penal, Derecho procesal, Derecho romano, Derecho del trabajo, Fundamentos filosóficos del derecho, Historia del derecho, Instituciones del derecho civil, Introducción a la economía.

En el segundo ciclo se elegían tres secciones (derecho privado, derecho público y derecho de la empresa) ya experimentadas en los planes pilotos de las universidades de Sevilla y Valencia. Al término del segundo ciclo, los alumnos obtendrían el título de licenciados en derecho, sección correspondiente, que capacitaría para el ejercicio profesional.

Las materias obligatorias para la sección de derecho privado eran: Derecho civil, Derecho internacional privado, Derecho mercantil, Derecho procesal, Filosofía del derecho. Para la sección de derecho público eran obligatorias: Derecho administrativo, Derecho financiero y hacienda pública, Derecho internacional público, Derecho penal, Derecho político, Derecho procesal,

1972-1973 se implantaría el primer curso del ciclo primero de las facultades universitarias. Sin embargo, el Ministerio no estableció a tiempo las directrices conforme a las cuales debían elaborarse los planes de estudios. Por ello, por decreto de 18 de agosto de 1972 se aplazó la implantación de los nuevos planes. En el retraso pesan las dificultades que aparecieron para implantar este aspecto de la reforma. En lo que atañe a las facultades de derecho ilustrará el caso sevillano. MERCHÁN, *Cuatro lustros*, cit., pp. 163 ss. Antes de dictar las directrices, el Ministerio había elaborado un plan tipo para la licenciatura de derecho que dio a conocer en febrero de 1972. MERCHÁN, *Cuatro lustros*, cit., pp. 185 ss.

Derecho público eclesiástico. Para la sección de derecho de la empresa eran obligatorias: Derecho administrativo económico, Derecho civil, Derecho financiero y hacienda pública, Derecho mercantil, Derecho procesal, Derecho del trabajo. En cada sección debían cursarse además dos asignaturas de las restantes secciones.

Por orden de 27 de septiembre de 1973 se modificó con carácter experimental el calendario universitario, adecuando el año académico al año natural; así el curso comenzaría, ya con los nuevos planes, en enero de 1974. Y por resolución de la dirección general de universidades e investigación –vistas las distintas propuestas y oída la junta nacional de universidades– enseguida comenzaron a aprobarse los planes de estudios para el primer ciclo de las facultades de derecho.<sup>58</sup>

Al analizar los dieciocho planes aprobados hay que reconocer que, aunque se hicieron todo tipo de combinaciones, en general en este primer ciclo se siguió la estructura del plan de 1953, es decir, las asignaturas eran de carácter anual y en el primer curso estaban ausentes las materias de derecho positivo; quizás por el carácter formativo de este periodo escaseaban las clases prácticas. Al transformar en disciplinas las materias obligatorias se había optado también por un criterio conservador, con frecuencia la única materia que se desdoblaba era el derecho civil.

Pero el proceso de implantación de la reforma se interrumpió enseguida. La comisión de decanos de las facultades de derecho pidió al Ministerio la vuelta a los planes anteriores a la LGE; y el Ministerio –en atención a la experiencia obtenida, al carácter unitario de los estudios jurídicos, a la mejor planificación de las facultades, y de acuerdo con la junta nacional de universidades– accedió a la referida petición.<sup>59</sup>

Las facultades de Sevilla y Valencia volvieron al plan de 1965; la UNED, la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Barcelona al de 1953, como el resto de las facultades de derecho.<sup>60</sup> Subsistían así dos regímenes diferentes, uno de especialidades y otro unitario.

58 Por distintas resoluciones de la dirección general de universidades e investigación fechadas entre octubre y noviembre de 1973. La relación completa de esas resoluciones en MARTÍNEZ NEIRA, *La facultad de derecho en los años sesenta*, cit. El plan de estudios sevillano ha sido analizado y valorado por MERCHÁN, *Cuatro lustros*, cit., pp. 169 ss.

59 Resolución de la dirección general de universidades e investigación de 23 julio 1974 por la que se establece a partir del curso 1974-1975 el plan de estudios aprobado por decreto de 11 agosto 1953 en todas las facultades de derecho a excepción de las de Sevilla y Valencia que impartirán el plan aprobado por orden ministerial de 13 agosto 1965.

60 Pronto, sin embargo, la Autónoma de Madrid y la de Barcelona volvieron a sus planes de 1971 y 1972 respectivamente, además para estos planes se

Aunque pueda resultar paradójico, el “Estado nuevo” se presentó como un Estado de derecho. Así aparecía, por ejemplo, en el prólogo de una colección de normas sobre instrucción pública.<sup>61</sup>

Finalmente, hemos de advertir que la colección no cumpliría enteramente sus fines si no figurasen también entre sus páginas aquellas otras medidas de nacional interés que dieron vida al nuevo Estado y constituyen, a la vez, precioso testimonio del rigor jurídico de un Régimen que, desde sus primeros actos, mantuvo, pese a cuantos peligros amenazaron su existencia, un estado de Derecho celosamente custodiado, del que son demostración y ejemplo las disposiciones que a continuación se ofrecen.

Bien mirado, los regímenes autoritarios de la primera mitad del siglo XX proceden de la degeneración del Estado liberal decimonónico y por lo tanto heredaron algunos de sus planteamientos políticos y jurídicos.<sup>62</sup> Por eso los planes de estudio que se sucedieron en los años del franquismo mostraron una gran continuidad con los existentes en años anteriores. En efecto, entre los planes de la primera edad moderna y los ilustrados existe una ruptura ya que frente al estudio de los textos romanos y canónicos se propuso el análisis de las leyes naturales; después, los planes liberales se basaron en los códigos nacionales: también los planes de la dictadura de Franco estaban contruidos sobre el derecho positivo del Estado. Obviamente en este derecho que era el objeto de la enseñanza aparecían novedades ideológicas, pero la definición de las fuentes del derecho era en esencia la misma. De ahí que el plan de estudio provisional aprobado en 1931 durante la República pudiese continuar sin alteraciones hasta la aprobación de la LOUE en 1943. Además, la morosidad que acompañó la redacción del nuevo plan permitió que el fervor del año de la victoria se enfriase y así las opciones docentes elegidas fueron verdaderamente clásicas: el derecho del trabajo fue la única novedad.<sup>63</sup>

Con todo, la ley de 1943 no produjo los frutos esperados, o mejor dicho, no llegó a aplicarse en su conjunto. Los años cincuenta fueron así los del

aprobaron las materias del segundo ciclo: orden de 8 febrero 1975 para Madrid y resolución de 29 mayo 1974 para Barcelona.

61 *Colección legislativa del Ministerio de Educación Nacional. Año 1936 (Desde el 25 de julio)*, Madrid 1940.

62 No extraña por eso los recuerdos de Haffner sobre cómo se vivió desde el tribunal cameral de Berlín la llegada de los nazis al poder, y en concreto cómo el 31 de marzo de 1933 fueron expulsados de él los jueces y letrados judíos. SEBASTIAN HAFFNER, *Historia de un alemán. Memorias 1914-1933*, Barcelona 2000, pp. 157 ss.

63 Era una materia que desde 1916 se enseñaba –aunque en un contexto más amplio– en una cátedra de doctorado; el Fuero del trabajo aprobado en 1938 y las magistraturas de trabajo sirvieron para su nueva configuración. MIGUEL C. RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, “La irrupción de nuevos sectores: el derecho laboral”, en ADELA MORA (ed.), *La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*, Madrid 2004, p. 447.

descubrimiento del abismo que existía entre el modelo propuesto por la ley y la cotidiana realidad universitaria. Esta desilusión ideológica llevó a la celebración de una asamblea de las universidades españolas en 1953, en ella se debatió sobre la ley, sobre la autonomía de la universidad, sobre el papel de los colegios mayores, sobre la formación religiosa, sobre los planes de estudios. El plan de 1953 fue sólo una reordenación en cursos anuales de los cuatrimestres anteriores, es decir, un cambio más bien formal.

Todo el orden universitario que cuidadosamente se había ido construyendo desde la guerra entró en crisis en los años sesenta. La crisis estuvo motivada por el cambio generacional, pero sobre todo por un nuevo marco económico y social que se tradujo en la denominada masificación.

En este contexto presenciamos un interés prioritario por la economía frente a la política, y esto lo vemos reflejado con claridad en la organización de la enseñanza. Se apostó por una universidad investigadora, lo que llevó a la definición de las estructuras departamentales en sustitución de las arcaicas cátedras; por una formación técnica y especializada –en plena sintonía con el auge del fordismo que se había propagado por toda Europa tras el final de la segunda guerra mundial– que exigía unos planes de estudios flexibles en los que sobraban las denominadas enseñanzas complementarias; además, la materia jurídica más relacionada con el mundo capitalista –el derecho mercantil– mostró un gran dinamismo en este periodo. Todo esto se ensayó en los años sesenta y de alguna manera cristalizó en la nueva ley de 1970. Los planes de estudios que surgieron de la aplicación de esta norma asumieron la experiencia proporcionada por los ensayos de las facultades de Sevilla y Valencia. El régimen de Franco comenzó y terminó por tanto redefiniendo la universidad y los estudios jurídicos, mostrando de esta manera la enorme evolución sufrida. Sin embargo, tanta novedad no pudo o no quiso ser asimilada en la agonía del régimen y sólo en el seno de la Constitución de 1978 encontrará su realización.

Manuel Martínez Neira

Universidad Carlos III de Madrid

### Universität und juristisches Studium

Von Anfang an wollte die Diktatur unter Franco eine neue Universität gründen. Sie hatte die Absicht, liberale Traditionen zu brechen und die glorreiche, imperialistische Universität des spanischen goldenen 16. Jahrhunderts zu entthronen. Die Universität sollte nicht mehr nur Wissen vermitteln, sondern eine umfassende Erziehung bieten. Deswegen wurde den *Colegios Mayores* (Studentenwohnheimen) in Bezug auf ihre strukturelle

Gliederung auch besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet. Dies spiegelt sich besonders in ihrem Elite-Status wider. Das für diesen Zweck gewählte juristische Instrument war das Gesetz über „die Ordnung der spanischen Universität“ vom 29. Juli 1943, in der spanischen Abkürzung auch LOUE. Der Gesetzeserlass vom 7. Juli 1944 erneuerte die interne Struktur der Jurfakultät und es wurde ein neuer Studienplan eingeführt.

Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass die autoritären Regime der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus einer Situation des zerfallenden Staats hervorgegangen sind und dennoch einige seiner politischen und juristischen Sichtweisen übernommen haben. Daher haben die Studienpläne der ersten Jahre des Franquismus auch eine große Ähnlichkeit mit den im Vorfeld bereits existierenden Plänen. Tatsache ist allerdings, dass zwischen den Studienplänen der Neuzeit und den hier beschriebenen ein klarer Unterschied besteht, insofern als für das Studium lateinischer und kanonischer Texte die Analyse des Naturrechts vorgeschlagen wurde. Außerdem basierten die liberalen Studienpläne auf den nationalen Gesetzbüchern: Auch die Konzepte des Franco-Regimes bauten auf dem positiven Recht des Staates auf. Es ist daher naheliegend, dass mit dem neuen Recht, das ein Element der Gestaltung darstellt, auch neue Ideologien aufkamen. Die Definition der Quellen des Rechts ist im Endeffekt aber immer die gleiche. Daher war es auch möglich, dass der während der Republik erstellte Studienplan bis zur Verabschiedung des LOUE 1943 gültig bleiben konnte. Zusätzlich bewirkte die Langsamkeit, mit der die Erstellung des neuen Plans einherging, dass der Eifer der Siegesjahre erlosch und die ausgewählten Möglichkeiten für den Unterricht tatsächlich letztendlich die klassischen Fächer waren: Die einzige Neuerung war das Fach Arbeitsrecht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gesetz von 1943 nicht die erhofften Ziele erreichte bzw. gar nicht erst in seiner Gesamtheit zur Anwendung kam. In den 50er Jahren wurde die Kluft zwischen dem vom Gesetz vorgeschriebenen Modell und der Realität des Universitätsalltags immer deutlicher. Diese ideologische Ernüchterung führte 1953 zu einer Generalversammlung der spanischen Universitäten, in der über das Gesetz, die Autonomie der Universität, die Rolle der Studentenwohnheime, die religiöse Bildung und die jeweiligen Studienpläne debattiert wurde. Der Studienplan von 1953 war im Endeffekt nur eine Neustrukturierung der bereits bestehenden Pläne, d. h. eine rein formale Veränderung.

Die gesamte universitäre Struktur, die mit so viel Sorgfalt nach Kriegsende aufgebaut worden war, geriet in den 60er Jahren in eine große Krise. Die Krise ergab sich zum einen aus dem Generationswechsel, aber auch durch den neuen wirtschaftlichen und sozialen Rahmen, der sich insbesondere durch eine regelrechte Vermassung der Universitäten zeigte.

In diesem Zusammenhang lässt sich deutlich das primäre Interesse der Politik an der Wirtschaft erkennen. Dies spiegelt sich besonders klar in der Organisation des Bildungswesens. Schwerpunkt wurde die universitäre Forschungsarbeit, was wiederum zu einer neuen internen Einteilung in verschiedene Abteilungen führte, die die alten Lehrstühle ersetzen. Ebenso legte man Wert auf eine technische und spezialisierte Ausbildung: dies in deutlichem Einklang mit dem europäischen Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg, der flexible Studienpläne erforderte, besonders in den Fächern, die bis dahin als Zusatzfächer gegolten hatten (Religion, Politik, Sport); ebenso erfuhr der juristische Bereich in der Beschäftigung mit dem Kapitalismus, dem Handelsrecht einen gewaltigen Aufschwung. Die Situation in den 60er Jahren führte zwangsläufig zu einem neuen Gesetz im Jahr 1970, welches das alte LOUE ersetzte. Die aus diesem Gesetz hervorgehenden Studienpläne stehen deutlich unter dem Einfluss anderer europäischer Länder. Das Franco-Regime begann und endete also mit einer Neudefinition der Universität und der juristischen Studien und durchläuft in dieser Hinsicht eine gewaltige Entwicklung. Dennoch konnte oder wollte die Agonie des Regimes so viel Neuheit nicht anerkennen. Das Neue fand letztendlich im Rahmen der Verfassung von 1978 seine Verwirklichung.



Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek  
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Vittorio Klostermann GmbH  
Frankfurt am Main 2008

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks und der Übersetzung. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, dieses Werk oder Teile in einem photomechanischen oder sonstigen Reproduktionsverfahren oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten, zu vervielfältigen und zu verbreiten.

Druck: Wilhelm & Adam, Heusenstamm  
Typographie: Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier  ISO 9706

Printed in Germany  
ISSN 1610-6040  
ISBN 978-3-465-04061-3